

ARGENTINA: ENTRE LA DESINTEGRACIÓN Y LA REVOLUCIÓN

James Petras y Henry Veltmeyer

INTRODUCCIÓN

A comienzos y mediados de los años 90 las instituciones financieras internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), las instituciones financieras regionales (el Banco de Desarrollo Interamericano) y los países del 7-G (Norteamérica y Europa Occidental) alabaron el programa de liberalización argentino como un modelo económico para el Tercer Mundo¹. Entonces el presidente Menem y su ministro de economía Cavallo prometieron al pueblo argentino que pronto formarían parte del "Primer Mundo".

Hoy Argentina se halla en estado de absoluta desintegración; no solamente su economía atraviesa su quinto año de recesión/depresión, sino que su sistema bancario ha colapsado, el índice de desempleo se ha disparado y más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. En este informe analizaremos las políticas neoliberales impulsadas por las instituciones financieras internacionales (IFIs) y el G-7 y aplicadas por los regímenes Menem (De la Rúa y Duhalde) desde los años

90 hasta el 2002; a continuación, analizaremos críticamente los postulados teóricos y los resultados prácticos que han llevado a la situación actual (mediados del 2002). Nuestra tesis es que esas políticas y las fuerzas socioeconómicas que las han implementado son la causa directa de la desintegración del país. A fin de calibrar la profundidad y dimensiones de la desintegración nacional argentina, estudiaremos tres series de indicadores:

- 1) Colapso de la economía: estudiaremos la industria, las finanzas y los servicios.
- 2) Empobrecimiento masivo: analizaremos empleo, ingresos, sanidad y alimentación.
- 3) Fractura de la autoridad política y nivel de conflicto social.

A continuación, pasaremos a examinar los nexos causales que relacionan las políticas neoliberales, las estructuras del poder estatal y la subordinación internacional con la desintegración de Argentina. La lógica de nuestra pesquisa nos llevará a continuación a analizar las consecuencias de la desintegración de Argentina en relación con:

- 1) Sus antiguos patronos de las IFIs y del G-7,
- 2) Las demandas actuales de sus benefactores externos y sus implicaciones.
- 3) Las alternativas a la desintegración y subordinación encarnadas en dos programas diferentes, el Plan Phoenix y el Plan Prometeo.

El hilo conductor de nuestro estudio estará constituido por las siguientes hipótesis:

- 1) La economía argentina se encuentra en proceso de regresión irreversible y constante que lleva a la desintegración de la soberanía nacional, al desempleo masivo y a la depresión económica.
- 2) La causa principal de la recesión se halla en las estructuras neoliberales del poder y en políticas que han facilitado el saqueo de la economía, la corrupción a escala masiva y una deuda externa

creciente que no halla correlato en el crecimiento de las fuerzas productivas.

- 3) Las fracasadas políticas neoliberales, el saqueo económico y la deuda externa exponencial hicieron de Argentina un país inatractivo para inversores extranjeros y prestamistas oficiales que procedieron a demandar mayores sacrificios al tiempo que en la práctica rechazaban conceder más financiación para reflotar el régimen y la economía.
- 4) Los Estados neoliberales fracasados como Argentina se enfrentan a tres alternativas:
 - a) convertirse en súbditos coloniales del neoimperialismo;
 - b) embarcarse en un proyecto neoestructuralista;
 - c) emprender transformaciones de corte revolucionario.

Estas son las hipótesis que guían nuestra investigación y dirigen nuestra pesquisa sobre las causas que explican la situación de los Estados neoliberales fallidos y sobre el tipo de acción decidida que puede evitar su fracaso y reformar o revolucionar a naciones que han caído presas de la trampa neoimperial.

COLAPSO ECONÓMICO Y EMPOBRECIMIENTO MASIVO

Ningún país ha caído tan rápida y profundamente en un estado de pobreza masiva ni ha experimentado un colapso económico tan prolongado como Argentina. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos han aplicado políticas neoliberales, ninguno lo ha hecho de forma tan intensa y acelerada como Argentina. Además, ningún país latinoamericano estaba tan avanzado desde el punto de vista industrial y poseía una economía tan diversificada como Argentina². Por último, Argentina disfrutaba del nivel de vida más alto de la región, la fuerza de trabajo más especializada y cualificada y la dirigencia política más determinada a seguir los preceptos de las IFIs y del G-7.

Argentina es un banco de pruebas de la eficacia y limitaciones de la perspectiva neoliberal bajo condiciones

óptimas: un Gobierno complaciente, una infraestructura bien desarrollada, una fuerza de trabajo cualificada, antiguos vínculos con los mercados mundiales y una clase media significativa con tendencias consumistas compatibles con los patrones culturales euroamericanos.

El resultado de 27 años de neoliberalismo nos proporciona una adecuada referencia temporal para evaluar su impacto sobre la economía y la sociedad y evitar desenlaces circunstanciales o coyunturales.

EMPOBRECIMIENTO MASIVO Y DESIGUALDADES CRECIENTES

El número de argentinos que viven por debajo del umbral de pobreza ha aumentado de forma geométrica. Hace 10 años eran menos del 15%, hace 2 años eran el 30% y en junio del 2002 el porcentaje sobrepasaba el 50%.³ En Argentina, a fecha de junio del 2002, el régimen de Duhalde reconoce que sobre 18,2 millones de argentinos el 51,4% vive por debajo del umbral de pobreza. De esos, 7,7 millones son indigentes, de acuerdo con el SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), una institución oficial bajo jurisdicción presidencial. La cifra de niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza es casi la mitad de los 8,2 millones de pobres. La depauperación está creciendo a un ritmo acelerado. Entre enero y mayo del 2002 el número de pobres creció en 3,8 millones de personas, es decir, 762.000 al mes, es decir, 25.000 al día. Entre los pobres, el índice de pobres indigentes está creciendo de forma incluso más rápida que el índice general de pobreza. Por ejemplo, en 1998 el 28,9% de los pobres eran indigentes; en junio del 2002 la proporción de indigentes era del 42,6% de la población de pobres. La masificación de la pobreza extrema se manifiesta en los elevados índices de malnutrición infantil (más del 58% de los niños están desnutridos en Matanzas, un suburbio obrero de Buenos Aires). En el interior se multiplican los informes acerca de niños que se desmayan en la escuela por falta de alimentación. Más del 60% de los recién nacidos en Misiones padecen anemia como consecuencia



de los recortes que el Gobierno ha efectuado en programas de alimentación escolar para complacer las demandas del G-7 y del FMI.

Exceptuando al 10% de la población situada en la cúspide de la pirámide social y a los capitalistas extranjeros, los ingresos de todos los sectores obreros de la población y de los pensionistas han experimentado un declive medio del 67% en términos de ingresos mensuales. El descenso de los ingresos ha sido profundo, repentino e ininterrumpido. En 1997 el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PDNU) calculó que la renta per cápita anual de Argentina era de 8.950 dólares. En marzo del 2002 era de 3.197 dólares⁴. Este descenso afecta a todas las regiones del país. Si utilizamos como indicadores aproximados de "clase" las diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires podemos estimar de forma aproximada el impacto social de la crisis. La capital Buenos Aires, que podemos considerar como integrada básicamente por la clase media, vio descender los ingresos medios desde 909 dólares mensuales en diciembre del 2001 a 363 dólares en marzo del 2002. En los suburbios obreros de la ciudad de Buenos Aires los ingresos cayeron de 506 dólares a 202 dólares. En la provincia de

Buenos Aires los ingresos cayeron de 626 dólares a 250 dólares⁵. Si examinamos la estructura ocupacional, el mayor descenso se produce entre los trabajadores del sector informal y entre los pensionistas. En la capital los ingresos de los "informales" cayó de \$643 a \$257; en los suburbios obreros descendió de \$334 a \$134; en la provincia, de \$394 a \$158. Entre los pensionistas el descenso fue igualmente devastador: de \$437 a \$175 en la capital; de \$320 a \$128 en los suburbios obreros y de \$360 a \$144 en la provincia⁶.

La situación es mucho peor en el resto de las provincias, donde los salarios son más bajos, el desempleo mayor y las demoras en el pago de los salarios y pensiones alcanzan frecuentemente entre los 3 y 6 meses.

Para la clase trabajadora y para la clase media la pérdida de empleo formal significa un severo descenso de sus ingresos. Con el desempleo duplicándose entre 1999-2002 (mayo) el número de indigentes y pobres pertenecientes a la antigua clase media/trabajadora ha aumentado de forma geométrica. Asalariados del sector privado de la capital que ganaban \$904 en diciembre del 2001, tres meses más tarde (marzo del 2002), reducidos a la condición de subempleados, ganaban \$257 en el sector informal. Con un incremento de precios del 30% en el mismo período, el poder adquisitivo real en diciembre del 2001 se redujo aún más (ver tabla 1).

El descenso de los ingresos de diferentes categorías profesionales indica el descenso absoluto y relativo de la clase media, su claro proceso de proletarianización: empleados de banca de la capital han visto cómo sus ingresos se redujeron cerca del 60%, de \$1.081 a \$432 al mes, y funcionarios de la capital han experimentado una caída de \$1144 a \$458 mensuales⁸. A fecha de abril del 2002 los ingresos medios de la antigua clase media no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alquiler, alimentación, transporte, educación y sanidad; de ahí la necesidad de que todos los miembros de la unidad familiar recurran al pluriempleo –algo prácticamente imposible. La movilidad descendente de la clase media se hace

TABLA 1
La nueva estructura de ingresos posterior a la devaluación*

Tipo de ingresos en dólares USA	Capital Buenos Aires		Suburbios		Gran Buenos Aires	
	Dic. 2001	Mar. 2002	Dic. 2001	Mar. 2002	Dic. 2001	Mar. 2002
Ingresos Medios Generales	909	364	506	202	626	251
Autónom@s	881	353	392	157	522	209
Emplead@s de banca	1081	432	735	294	848	339
Trabajador@ informal	643	257	334	134	395	158
Emplead@ públic@	1144	458	624	250	810	324
Emplead@ del sector privado	904	362	550	220	648	259
Pensionista	437	175	320	128	361	144

*Redondeados al dólar más cercano

evidente si comparamos su salario actual con el que percibían los trabajadores asalariados con anterioridad a la devaluación. Los salarios privados de los trabajadores suburbanos antes de la devaluación eran de \$550; los ingresos de la clase media posteriores a la devaluación son solamente el 75% de los antiguos salarios de la clase trabajadora.

Si tomamos la cifra de \$400 como marca del umbral de pobreza y la de \$250 como marca de la línea de indigencia, hallamos que todas las categorías profesionales de la clase trabajadora de los suburbios del Gran Buenos Aires se encuentran situadas por debajo de la línea de pobreza y que algunas categorías son indigentes. En la capital, el 60% de los sectores laborales se hallan por debajo de la línea de pobreza (autónomos, sector informal, trabajadores del sector privado).

Los pensionistas que dependen fundamentalmente de sus pensiones son indigentes en todos los sectores geográficos, como lo son también todos los trabajadores desempleados (25%-30% de la población laboral) que viven en los suburbios y en el Gran Buenos Aires. Incluso si aceptamos que algunos trabajadores desempleados trabajan en el sector informal, prácticamente todos ellos se hallan cercanos a, o por debajo de, la línea de indigencia. El incremento masivo del desempleo hasta el 25%-30% a nivel nacional, hasta el 40%-60% en los suburbios obreros y hasta índices aún superiores en algunas de las antiguas ciudades industriales del interior, la movilidad descendente y el empobrecimiento de la clase obrera y media —su precipitado declive en términos de ingresos y condiciones de vida— recuerdan los peores años de la depresión estadounidense de los años treinta y de la Alemania de Weimar de los años veinte.

Simultáneamente, y en relación con el empobrecimiento de la inmensa parte de las clases obrera y media, se produce la concentración de riqueza en manos de la clase dirigente, de la alta clase media y de capitalistas y banqueros extranjeros. En 1974 el 10% más rico de la población acaparaba el 28% de los ingresos nacionales;

en 1992 algo más del 34% y en el 2001 más del 37%, mientras que el 10% más pobre recibía el 2,2% en 1974 y en 1992 y el 1,3% en el 2001, antes de la devaluación y del dramático aumento del desempleo⁹. En 1974 el 10% más rico de los ricos ingresaba 12 veces la cantidad ingresada por el 10% más pobre. Si tomamos en cuenta el abultado y común maquillaje a la baja de los ingresos declarados por las clases acaudaladas, el departamento de estadística del Gobierno calcula que las desigualdades actuales son mucho mayores: según su estimación, el 10% más rico de la población gana 40 veces más que el 10% más pobre¹⁰.

El conjunto de las clases altas —la clase dirigente más la clase media alta— perciben el 53% del los ingresos declarados, y probablemente la proporción real está más cerca del 60-65% anterior a la devaluación. Dado que las clases altas pudieron retirar sus fondos (de 30.000 a 40.000 millones de dólares) de los bancos y sacar su dinero del país, evitando su confiscación (la de diciembre del 2001), el porcentaje de riqueza en manos de las clases altas es probablemente cercano al 80%. El impacto del neoliberalismo ha tenido un profundo y doble efecto estructural: empobrecer a la clase obrera y a la clase media y enriquecer a las clases altas. A mediados de los años 90, el desigual crecimiento de los ingresos nacionales basados en la entrada masiva de fondos especulativos, créditos extranjeros y privatización de empresas públicas aumentaron de forma artificial los ingresos medios. Sin embargo, cuando cesaron esas inyecciones de capital a corto plazo los ingresos y el empleo cayeron en picada para el 80% de los trabajadores asalariados y para los autónomos, mientras que la movilidad del capital, la elevada liquidez y las fuentes de ingresos diferentes de los salarios de los que disfrutaban los muy ricos protegían su riqueza y condujeron a un extraordinario aumento de las desigualdades.

Mientras que la depauperación y las diferencias en los ingresos aumentaron con la recesión/depresión que arrancó en 1998, la desastrosa caída de ingresos y de nivel de vida para las clases medias (el 40% de la población de

la capital) se produjo al comenzar la depresión del 2001-2002, seguida por la confiscación/congelación de cuentas bancarias de diciembre del 2001 y de la consiguiente devaluación e inflación. Según estimaciones de expertos financieros, a comienzos del 2001 los argentinos tenían 86.500 millones de dólares depositados en bancos de titularidad mayoritariamente extranjera y en su gran parte en dólares¹¹. Durante el año 2001, y especialmente a partir del período abril-noviembre, las clases altas retiraron y sacaron del país 40.000 millones de dólares. En diciembre el Gobierno congeló las cuentas bancarias y después convirtió los fondos congelados en pesos (al 1 de junio del 2002 el cambio se sitúa en 3,3-3,5 pesos por dólar). En efecto, las cuentas se redujeron de 45.000 millones de dólares a aproximadamente 13.000 millones de dólares y continúan bajando ya que no existe indexación. El intento del régimen para convertir el capital restante en bonos del Estado amortizables en 10 años al 2% de interés devaluaría aún más los ahorros, habida cuenta del índice de inflación del 30% para el primer cuatrimestre del 2002. Esta tentativa por parte del régimen para estafar a los argentinos el resto de sus ahorros fue abortada por medio de manifestaciones masivas realizadas por la clase media empobrecida —los cacerolazos que amenazaron el Congreso y asaltaron las oficinas bancarias—.

La desintegración social y la polarización tienen su raíz en el colapso de la economía argentina y en la profunda y crónica recesión industrial. Durante los tres primeros meses del 2002 la actividad industrial descendió en más del 18%¹². La recesión industrial se aceleró entre abril y marzo del 2002: de -2% en abril del 2001, a -4% en julio del 2001, a -10% en septiembre, a -12% en noviembre y a -18% en marzo del 2002¹³. La producción de automóviles cayó un 55% en marzo del 2002 comparada con el mismo período del año anterior, mientras que la producción textil y manufacturera cayó un 48% con respecto al año anterior. En el 2001 la industria descendió un 10%¹⁴. El número de cierres de factorías aumentó a lo largo del período 1999-2002, alcanzando cuotas sin precedentes en el último trimestre del 2001 y en la primera mitad del 2002. A principios del 2002 casi tres

cuartas partes de los industriales predijeron que la crisis empeoraría¹⁵. El nivel de la capacidad industrial no utilizada sobrepasaba el 50% en la mayoría de los sectores económicos, incluyendo el sector del metal, del textil y de los componentes de automoción.

El sistema financiero se encuentra al borde de la bancarrota, en parte debido a las transferencias financieras a gran escala realizadas a la casa madre por filiales de propiedad extranjera. La deuda externa creció de 58.700 millones de dólares en 1990 a 139.900 millones de dólares en 1998, mientras la fuga de capitales y el pago de intereses aumentó en el mismo período a 115.000 millones y 81.700 millones de dólares¹⁶. En otras palabras, el crédito externo financió ampliamente la fuga de capitales y parte del exuberante pago de deuda, dejando un déficit neto de flujos de capital. Esto erosionó la capacidad económica para sostener el crecimiento y condujo a la recesión, a mayores recortes presupuestarios, los cuales a su vez convirtieron la recesión en depresión. La retirada masiva de fondos realizada por las élites extranjeras y nacionales —auxiliadas y toleradas por los bancos extranjeros— provocó la confiscación de los ahorros de millones de argentinos y el virtual colapso del sistema financiero. A lo largo del período 1999-2001 los préstamos del FMI solo sirvieron para pagar a bancos privados y a las IFIs, al tiempo que exacerbaron el problema de la deuda, agudizaron la recesión e hicieron descender el nivel de vida. Para conseguir créditos a corto plazo Argentina estaba pagando el 16% sobre bonos del Tesoro estadounidense hasta una fecha tan tardía como agosto del 2001¹⁷. Cuando finalmente se produjo el colapso, ni las IFIs ni el Banco Mundial ni el G-7 estaban dispuestos a prestar más dinero, a menos que el Gobierno central aboliera su Ley de Subversión Económica (una ley cuyo objeto era perseguir las prácticas bancarias ilícitas), suprimiera las monedas provinciales que estaban manteniendo a flote las economías locales y despidiera a varios cientos de miles de funcionarios de la sanidad, educación y otros servicios públicos.

La preocupación clave de las IFIs al rechazar la Ley de Subversión Económica era que se trataba de un

instrumento para perseguir a los bancos del G-7 implicados en la transferencia ilegal de más de 50.000 millones de dólares en el año 2001-2002 (en junio del 2002 la ley fue retirada por presiones del FMI). Mientras el FMI acusaba a los ahorristas argentinos de ser responsables de la crisis financiera (por haber retirado sus ahorros presa del pánico), existen datos sustanciales que demuestran que los bancos privados, en su mayoría propiedad de extranjeros, ya habían consumado una transferencia masiva de fondos al extranjero y no tenían el menor deseo de recapitalizar los bancos¹⁸. Por otro lado, el FMI/Banco Mundial presionaron al Gobierno argentino para que se hiciera cargo de las obligaciones de los bancos privados con respecto a sus depositarios y emitiera bonos del Estado con diez años de garantía en lugar de pagar directamente a los titulares de las cuentas de ahorro. En ausencia de fondos y con la negativa de las casas matrices para recapitalizar sus sucursales argentinas, los bancos privados extranjeros y nacionales declararon hallarse al borde de la bancarrota en el momento en que los titulares legítimos de las cuentas intentaron retirar sus ahorros. La única medida capaz de impedir el colapso total fue la congelación de las retiradas de fondos.

Resumiendo, el experimento neoliberal no sólo ha empobrecido al 80% del pueblo argentino, no sólo ha arruinado sus industrias, conducido a más de un cuarto de ellas a la bancarrota o a sus aldaños y robado sus ahorros a sus clases medias, sino que ha socavado los cimientos mismos de la economía capitalista. Aparte del aumento de desigualdades descomunales, la economía neoliberal ha conducido al saqueo de la economía mediante la transferencia legal/ilegal al extranjero de decenas de miles de millones de dólares que han sido sustraídos del circuito de la economía nacional y colocados en inversiones en el extranjero, cuentas de ahorros, propiedades inmobiliarias y bonos del tesoro. Para aquellos capitalistas con capital fijo y limitados recursos de capital activo las políticas neoliberales han tenido consecuencias desastrosas debido a los desorbitados tipos de interés, a la desigual competencia derivada de la entrada en el país de importaciones baratas exentas de aranceles y

por el colapso de la economía doméstica debido a los elevados índices de desempleo y al descenso en picado de las condiciones de vida de la clase media. El neoliberalismo es como "la cerda que devora a su propia prole".

CAUSAS DEL COLAPSO

La causa inmediata del colapso del capitalismo argentino ha sido el papel jugado por los bancos extranjeros y las IFIs dirigidas por el FMI en la tarea de vaciar el sistema financiero argentino. Las causas a más largo plazo son los cambios estructurales regresivos (privatizaciones / SAP / apertura de mercados) y la casi criminal 'desregularización' de la economía, que causó no solamente el colapso de la producción doméstica sino también el saqueo sistemático de la economía y, más tarde, de millones de cuentas de ahorro.

Los expertos económicos y otros apogetas de la élite financiera arguyen que los causantes de la crisis bancaria fueron los ahorristas, que retiraron sus depósitos y los sacaron del circuito del sistema financiero¹⁹. Mientras que las retiradas de fondos realizadas por los ahorristas fue un factor que contribuyó a la crisis, no fue sin embargo la causa principal o determinante que la desencadenó. Durante el período que culminó en la crisis (febrero 2001–noviembre 2001), los activos financieros (préstamos y otros créditos) del sistema financiero argentino disminuyeron en 44.800 millones de dólares, de los cuales 37.300 millones provenían del sector privado (83,4%), de los cuales 26.500 millones de dólares (59,1%) provenían de los diez principales bancos privados²⁰. En otras palabras, en los meses que condujeron a la crisis, los diez principales bancos sacaron aproximadamente 27.000 millones de dólares del sistema financiero argentino. Esto es evidente si analizamos los activos y pasivos de los bancos. "Otros créditos de intermediarios financieros" en el capítulo de activos y "Otras obligaciones de intermediarios financieros" en el capítulo de pasivos²¹. La existencia de estas categorías revela el hecho de que el sistema financiero argentino operó en dos niveles: por un lado, existía un

sistema formal de depósitos y créditos y, por otro, funcionaba un "sector informal" en el que las mega-cuentas operaron sobre todo para lavar fondos y desarrollar todo tipo de actividades especulativas en el sector financiero. Las "otras" categorías" en febrero del 2001 representaban una cifra de 56.900 millones de dólares en activos y 60.000 millones de dólares en obligaciones²². Para noviembre, el total de los "otros" descendió a 25.000 millones de dólares para los activos y 35.000 millones para las obligaciones. Un análisis más detenido revela que del descenso de 25.000 millones de dólares de activos más del 74% tuvo lugar entre los diez bancos más importantes²³. Los créditos del FMI a Argentina sirvieron para cubrir la creciente sangría de recursos del sistema financiero causada por las élites financieras, al tiempo que se imponían recortes más drásticos en el gasto público y en las inversiones. El triple fenómeno de creciente depresión económica, fuga de capitales y creciente endeudamiento fue causado por la alianza de las IFIs, los grandes financieros locales y extranjeros y los bancos extranjeros. Los pequeños y medianos ahorristas argentinos fueron las víctimas de una estafa financiera encubierta, no sus perpetradores, como pretenden los expertos económicos. Su desesperado y tardío intento de retirar sus ahorros fue una reacción a la estafa financiera ejecutada por las élites financieras. La mayoría de los pequeños y medianos ahorristas, sin embargo, no tuvieron éxito. Los pasivos de los bancos después de la fuga de las grandes cuentas y del agotamiento de los créditos externos sobrepasaba ampliamente el montante de sus activos; con la crisis económica, muchos de sus extraordinarios créditos eran delictivos y no había forma humana para que las casas matrices inyectaran fondos para cubrir la demanda de los ahorristas. El Gobierno intervino para "salvar a los bancos" congelando efectivamente todos los depósitos e impidiendo de esa forma que los impositores recuperaran sus ahorros. El escandaloso sesgo clasista del plan de rescate financiero ideado por el Gobierno provocó la cólera de las clases bajas y medias. La ulterior devaluación del peso les robó de hecho dos tercios del valor nominal de sus ahorros congelados y rebajó sus ingresos, mientras que la clase media-alta y la clase dirigente, que

habían sacado su dinero del sistema financiero, vieron abarataados los precios que afectaban su nivel de vida, producción y consumo en un 65%.

El colapso financiero y la depresión económica tienen su raíz en las políticas neoliberales y en el contexto en el que fueron aplicadas. Sin embargo, más fundamentales aún son la naturaleza y la estructura de las clases dirigentes y gobernantes que impusieron el modelo neoliberal que ha destruido la economía argentina. A diferencia de la mayoría del resto de los países de América Latina, Argentina era un país altamente industrializado que a mediados de la década de los 70 contaba con uno de los más elevados porcentajes del mundo de fuerza laboral empleada en el sector manufacturero. Aún a finales de la década de los 80 Argentina era proporcionalmente el país más industrializado de la región. Con una fuerza de trabajo altamente especializada y relativamente mejor pagada que en el resto de América Latina y con un sistema de cobertura social para los trabajadores sindicados comparable con el de Europa, existía en Argentina un sustancial mercado interno. Argentina poseía algunos de los suelos cultivados más ricos y extensos del mundo y un sector de agroexportación muy competitivo, así como multitud de fuentes de energía (petróleo, gas natural, energía hidráulica). En una palabra, Argentina poseía un mercado atractivo para los exportadores, recursos rentables para los inversores y sustanciales depósitos bancarios para la banca extranjera. La rápida y extensiva liberalización de la economía produjo un efecto devastador sobre este país fuertemente industrializado. La industria argentina sufrió por un lado la presión de las importación de mercancías baratas provenientes de áreas de bajos salarios (Asia) y, por otro, del impacto de las importaciones a gran escala de las fuertemente subsidiadas manufacturas de alta tecnología americanas y europeas. El argumento liberal de que la "competencia" haría que las empresas argentinas fueran más "eficientes" era falso: pocas compañías argentinas tenían las dimensiones necesarias para competir con las mayores multinacionales estadounidenses y europeas y ni siquiera los trabajadores argentinos peor pagados podían competir con los trabajadores

chinos cuyo salario es de un dólar al día. La rápida desaparición de las barreras arancelarias impidió a su vez cualquier posibilidad de prepararse adecuadamente para afrontar la competencia y la ausencia de reciprocidad en la reducción de subsidios y la eliminación de los aranceles en los USA y Europa impidió a las empresas argentinas competitivas conquistar mercados extranjeros.

La experiencia histórica y contemporánea de las políticas de liberalización en los USA y en los países de la Unión Europea demuestra que en esos países el proceso de liberalización ha sido un proceso gradual de liberalización selectiva, al menos en comparación con la experiencia argentina. La libre convertibilidad no se aplicó en Europa hasta que las economías no se encarrilaron en una senda de expansión constante, cosa que en algunos casos no ocurrió hasta bien entrados los años 60. Barreras comerciales, incluidas cuotas, tarifas y limitaciones no tradicionales (barreras sanitarias, injustas reglas comerciales y antidumping) son aún utilizadas de forma frecuente y extensa para proteger a sectores no competitivos. Masivos subsidios públicos y déficits fiscales son usados para promover exportaciones y estimular el crecimiento doméstico.

En Argentina las barreras comerciales se desmoronaron. La vinculación del peso con el dólar limitaba las posibilidades de acometer políticas monetarias expansivas orientadas a estimular la economía. Se recortaron los subsidios y se antepuso el pago de la deuda a las inversiones productivas. Se obtuvieron créditos mediante estrategias privatizadoras que afectaron a sectores lucrativos de la economía, socavando los ingresos públicos, aumentando los costes de producción y, por consiguiente, erosionando la competitividad. La privatización provocó severos recortes en el transporte que unía a las diferentes economías provinciales, perjudicando sus transacciones industriales y comerciales. Mientras que en economías basadas en la exportación de minerales y materias primas como Chile la liberalización abrió el país a la inversión extranjera en los sectores de exportación consolidados que eran competitivos y complementarios con

la economía industrial capitalista, en la economía argentina, mucho más desarrollada y diversificada, la industria resultó perjudicada. La avalancha de importaciones y el declive de las industrias nacionales provocó bancarrotas y desempleo, la transformación de manufactureros en importadores y comerciantes y, en las provincias, la inflación del sector público como último recurso del patrono. Vastas sumas de inversiones se desplazaron desde la arriesgada actividad productiva hacia instrumentos financieros de elevada rentabilidad²⁴.

El régimen Menem dio la imagen de ser un "régimen opulento" basado en créditos elevados y en un incremento extraordinario de los ingresos derivados de la venta de bienes públicos. La mayor parte de las entradas de capital incrementaron el consumo de la clase alta y facilitaron la corrupción masiva de la totalidad de la clase política y de su entorno de funcionarios, jueces, aduaneros, policía y militares²⁵. Los banqueros internacionales estaban dispuestos a conceder créditos porque los tipos de interés eran entre 10 y 20 puntos superiores a los tipos europeos y estadounidenses y la liquidez era sencilla debido a la convertibilidad libre y a que la dolarización de facto de la economía garantizaba la estabilidad monetaria. Así, cada paso del proceso de liberalización iba debilitando los fundamentos de la economía: la economía doméstica se retrajo, los empresarios huyeron a las aparentemente lucrativas actividades financiero-especulativas, se disparó el pago de la deuda, las transacciones de créditos a cambio de acuerdos de privatización llegaron a su punto límite y se aceleró la fuga de capitales a medida que las clases altas fueron sintiendo que el edificio liberal estaba condenado al colapso y que en breve no habría ni sistema productivo ni recursos monetarios para reconstruirlo.

Un factor decisivo para el colapso de la burbuja económica lo constituyó la conducta de la gran burguesía argentina²⁶. Cómodamente instalada en el régimen Menem, fue la beneficiaria inicial del proceso de privatización y de los créditos extranjeros²⁷. Fue también el grupo que dictó la política económica. El principal punto de

referencia del régimen Menem para el desarrollo de la agenda liberal fueron las clases dominantes argentinas que disponían de inversiones en el extranjero y que estaban estrechamente ligadas a los bancos extranjeros a través de inversiones conjuntas en bancos privatizados y de créditos extranjeros que demandaban un peso fácilmente convertible a dólares. La liberalización a ultranza permitió a esta burguesía argentina "transnacional" adquirir bancos y empresas públicas a precio de saldo y venderlas posteriormente al capital extranjero²⁸. La desregularización bancaria abrió la vía a masivas transferencias de fondos al exterior del país y al lavado de ganancias ilícitas. Importaciones baratas, créditos fáciles y masiva fuga de capitales fueron los tres conceptos sobre los que las élites argentinas definieron el proceso de liberalización.

Por razones evidentes los países del G-7 y las IFIs se mostraron entusiasmados: se hicieron con el control de bancos y depósitos, de lucrativas redes de telecomunicaciones, de compañías aéreas, industrias petrolíferas y numerosas otras empresas públicas altamente rentables. Y animaron al régimen a que avanzara a toda máquina con temeraria despreocupación.

Mientras que la economía doméstica se desmoronaba, especialmente en las provincias, los gobiernos provinciales se endeudaron de forma desmesurada, en parte para financiar la corrupta maquinaria política que mantenía al Gobierno nacional y en parte para evitar revueltas populares a nivel provincial. A diferencia de Corea del Sur, China y Japón, la corrupción a escala masiva no alcanzó a engrasar las ruedas de la producción nacional: los sobornos untaban las manos de quienes vendían lucrativas empresas públicas a inversores extranjeros que absorbían los activos y reducían la producción local a favor de la especulación a gran escala. Se estableció una relación inversamente proporcional: a medida que aumentaba la corrupción, declinaba la industria, los ingresos fiscales se reducían y la competitividad se transformaba en un slogan vacío.

La propiedad extranjera que los abogados de la liberalización describían como una fuerza dinámica de

crecimiento sostenido resultó no serlo tanto. La experiencia argentina describe la típica parábola viciosa: al aumento inicial de inversión extranjera que animó al régimen Menem a embarcarse en un proceso exuberante (o delirante) de privatización que causó una entrada masiva de capitales —de cartera y directos— le siguió un drástico declive a medida que los sectores lucrativos eran acaparados, los trabajadores eran despedidos, los mercados locales se contraían y la fuga de capitales a gran escala se ponía en marcha. El resultado fue una efímera eclosión de crecimiento a comienzos y mediados de los 90, seguida de declive y colapso. La secuencia era enteramente predecible dado que los inversores extranjeros inicialmente se aprovecharon de las ventas a precio de saldo de las empresas públicas con beneficios casi garantizados (en mercados monopolizados) y con tipos de interés desorbitados y, después, de forma silenciosa pero rápida, retiraron sus fondos dejando a la economía sin activos y con un futuro extremadamente incierto. Las IFIs actuaron como maestros y discípulos de la parábola: condicionaron la concesión de créditos públicos a una mayor liberalización durante el período inicial para favorecer a los inversores extranjeros y, más tarde, cuando la economía comenzó a decaer y crecían las deudas y el descontento social, impusieron condiciones aún más duras para continuar aportando financiación.

El proceso mismo de negociaciones entre el régimen y las IFIs se modificó con el tiempo. Al principio, cuando muchos recursos, mercados y oportunidades estaban a disposición de los inversores extranjeros, las IFIs extendieron un cheque en blanco al régimen, prestándole miles de millones de dólares y dando luz verde a banqueros privados e inversores extranjeros para que con extraordinarios beneficios explotaran el "mercado emergente". El resultado fue la adquisición de más bancos lucrativos, más empresas de telecomunicaciones y de petróleo por parte de bancos españoles y multinacionales e inversores estadounidenses. Mientras tanto, los inversores extranjeros se introdujeron en los sectores de la agroindustria, del comercio (grandes superficies), de la propiedad inmobiliaria y de la hostelería, en asociación con un

pequeño núcleo de la élite económica argentina y con algunos sectores de la cleptocracia política encabezada por la familia extensa Menem y su entorno político.

El primer efecto adverso fue el despido de empleados en el proceso de preparación de las empresas públicas para su privatización. El Estado despidió a cientos de miles de trabajadores de los sectores de telefonía, ferrocarril y agua, asumiendo los costes económicos y la responsabilidad de reprimir las protestas consiguientes. Muchas ciudades del interior, como por ejemplo la ciudad petrolífera de Neuquén, pasaron de ser prósperas ciudades a convertirse en ciudades fantasma con índices de desempleo cercanos al 30-40%. Las promesas de "empleo alternativo" nunca fueron cumplidas, pues los funcionarios provinciales y municipales vinculados al Gobierno central, o bien robaban directamente los fondos, o bien los utilizaban para financiar sus maquinarias políticas fomentando la creación de empleos "administrativos" improductivos.

El segundo efecto negativo fue la reducción de los servicios y del transporte, lo que aisló a las regiones argentinas de los mercados y proveedores regionales, nacionales e incluso internacionales. Los balances de las compañías privatizadas se basaban en beneficios empresariales, no en los rendimientos y rentas de la multitud de industrias y granjas que dependían de las redes de electricidad, energía, telecomunicaciones y transportes. De ese modo, mientras que los balances de las compañías privadas en manos extranjeras arrojaban saldos positivos, los resultados de las economías periféricas aparecían en caracteres rojos y dependían de forma cada vez mayor de subsidios del Gobierno central. Por otro lado, el coste público de la infraestructura necesaria para mantener a flote a las empresas privatizadas aumentaba, mientras que los ingresos a las arcas del Estado disminuían debido a exenciones fiscales y subsidios a gran escala. El resultado final fue el aumento del gasto público y el intervencionismo para promover la privatización —mientras los ingresos descendían— y la necesidad de mayores recortes en gastos sociales y mayores préstamos de capital

extranjero con tasas de interés cada vez más elevadas dado que la deuda externa se duplicó y los pagos de intereses aumentaron 2.5 veces entre 1992-1998. La privatización privó a la Argentina de aportaciones de bajo coste para la industria, hizo que subieran los costes del transporte y sobrevaluó el peso haciendo que los productos argentinos con alto valor añadido resultaran demasiado caros para ser vendidos en los mercados internacionales e incluso en los nacionales. La liberalización, lejos de aumentar la competitividad de la industria argentina, la condujo por la pendiente de la bancarrota y de la descapitalización de la investigación y el desarrollo (I+D). El apoyo a la industria y a la innovación sufrió un recorte drástico ya que la financiación pública a centros universitarios y de investigación disminuyó y los fondos privados se orientaron de forma cada vez mayor hacia el inflado y altamente rentable sector financiero.

La unilateral reducción de barreras aduaneras llevada a cabo por el Gobierno Menem debilitó a las empresas locales sin recompensar adecuadamente a los productores eficientes, ya que el régimen no supo garantizar acuerdos recíprocos con los USA y Europa para que también estos países redujeran sus barreras comerciales. El resultado final de todo esto fue que Argentina compitió con dos juegos de reglas diferentes: por un lado seguía los rígidos preceptos del liberalismo en relación con su economía y, por otro, aceptaba las flexibles reglas "liberal-proteccionistas" que aplicaban la mayoría de sus socios comerciales.

La continuación y profundización de las políticas de liberalización durante la década de los 90 —la bomba de relojería a punto de estallar— se basó en las estructuras del poder estatal. El régimen Menem era un régimen altamente autoritario que ignoraba al Congreso o sobornaba a los legisladores, que acaparaba los tribunales para asegurarse mayorías afectas, que centralizaba el poder en funcionarios no electos y que organizaba y generalmente financiaba a una poderosa maquinaria de partido que inhibía el desarrollo de una oposición organizada y aislada en los vecindarios más pobres —hasta que llegó

el colapso de finales de los 90. Además, el gangsterismo selectivo del partido estatal organizado por las agencias de inteligencia logró silenciar por medio de amenazas y, ocasionalmente, de asesinatos selectivos, a las voces críticas que se expresaban a través de los medios de comunicación.

La “centralización” de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la Presidencia —en su propia persona— y los métodos dictatoriales utilizados por Menem para legislar (la mayoría de los bancos e industrias fueron privatizados vía decreto presidencial) facilitaron la liberalización rápida y extensiva. La concentración y centralización del capital argentino fue simultáneamente causa y consecuencia de la liberalización y creció paralela a la centralización del poder Ejecutivo. El punto de referencia político y la perspectiva estratégica del régimen Menem estaban profundamente influidos por los vínculos estructurales con los grandes grupos económicos que emergieron durante la dictadura y después²⁹.

Mientras que la composición interna de los grandes grupos variaba, externamente su política era consistentemente liberal y orientada a ensanchar y profundizar sus lazos con las redes financieras europeas y estadounidenses. Para el presidente Menem y su zar económico Cavallo, estos grandes grupos económicos y sus circuitos internacionales y asociados constituían la realidad económica: el objetivo del Estado era velar por sus intereses, consolidar sus estructuras y expandir sus oportunidades. La neoliberalización significaba el desarrollo de políticas que facilitarían la adquisición de empresas públicas por parte de los grandes grupos económicos, la fácil transferencia de capitales al exterior, el acceso ventajoso a créditos extranjeros y la socialización por parte del Estado de las pérdidas privadas.

Bajo la administración Menem el Estado se involucró en la tarea de financiar la consolidación de los imperios económicos privados, más que en financiar inversiones productivas mediante el apoyo a los empresarios pequeños y medianos. Su liberalización comercial

permitió a los grandes grupos económicos centrar sus actividades en las finanzas, la inmobiliaria y el comercio, descuidando las inversiones para aumentar la productividad del sector manufacturero. El neoliberalismo significó que el régimen se especializaba en vender recursos públicos sin aumentar la producción ni la productividad. A su vez, los grandes grupos económicos argentinos adquirieron empresas públicas no para transformarlas en eficientes unidades productivas o de servicios, sino para revenderlas con beneficios al capital extranjero³⁰. El enorme flujo de capital estadounidense y europeo cambió la configuración del Estado argentino: pasó de ser un Estado liberal a ser un Estado neocolonial liberal, donde el Estado, a falta de ingresos domésticos, dependía cada vez más de los créditos extranjeros y de los ingresos derivados de los ingresos por exportación generados por empresas de titularidad extranjera.

La transición de una economía mixta a una economía liberal primero y neocolonial liberal después acompañó el ascenso y caída de la “parábola viciosa” de la economía argentina. Una secuencia que podría ser descrita como una tragedia griega en la que el orgullo desmedido de los protagonistas presagió el colapso final de una relación viciada en su misma base. La analogía, sin embargo, es deficiente en la medida en que los protagonistas —los Menems, los banqueros, las IFIs— no son quienes al final sufren la ruina. La figuras trágicas son la nación argentina y el 80% de su población.

Consecuencias: desintegración, abandono y pobreza

A medida que la economía argentina pasaba de la recesión a una total depresión, a medida que la producción industrial declinaba de un -6% en el último trimestre de 2001 a un -15% en el primer trimestre de 2002 y a medida que el sistema financiero se iba dirigiendo hacia un crash y se hizo evidente que la Argentina no podría pagar la mayor parte de su deuda, las IFI, los bancos extranjeros y los países del G-7 se niegan a concederle nuevos préstamos sino en las condiciones más onerosas³¹. En diciembre de 2000, los bancos concedieron un paquete

de \$40.000 millones bajo la dirección del FMI y en agosto de 2001 el FMI le concedió al tambaleante régimen de De La Rúa un crédito de emergencia de \$8.000 millones, 5.000 millones de los cuales fueron a parar al Banco Central Argentino y salieron del país a medida que la clase media alta sacaba miles de millones hacia el extranjero entre enero y noviembre. Varios miles de millones fueron destinados a la reestructuración de la deuda, de hecho, para pagar a los dueños de bonos en el extranjero. La asignación de fondos tampoco hizo nada para estimular la economía local, para bajar las tasas de interés o prevenir retiros privados de depósitos bancarios. De hecho, el préstamo del FMI a la Argentina incrementó su deuda de \$130.000 millones a casi \$140.000 millones en 2001 sin hacer frente a los problemas estructurales fundamentales, poniendo de esta manera en movimiento de colapso final en diciembre de 2001.

La causa por la que los créditos fracasaron en "salvar" a la economía argentina es que no estaban destinados a eso. Simplemente aportaron fondos para ser reciclados en la economía para "salvar" a las clases altas y a los grandes accionistas. Los grandes prestamistas reconocían lo peligroso de las condiciones: la tasa de interés distribuida entre papeles de la deuda del estado argentino y bonos del Tesoro de los EE.UU. se elevó al 16,7% a fines de agosto de 2001. En noviembre, los especuladores no estaban comprando bonos de la deuda argentina a ningún precio, dado que el gobierno inevitablemente iba rumbo al default (cesación de pagos de la deuda).

A medida que la economía argentina colapsaba, los prestamistas extranjeros y sus filiales bancarias presionaban al régimen para congelar los depósitos, amenazando con hacer colapsar el sistema financiero y retirarse de Argentina. El gobierno accedió. Devaluó la moneda, reduciendo las obligaciones de los bancos con respecto a sus depositarios de dólares. Los bancos y sus gobiernos delegaron en el FMI para desempeñar un papel de protagonista en las negociaciones para recuperar sus préstamos, aún cuando la economía estaba sedienta de nuevos financiamientos y de inversiones estatales y privadas.

Falto de todo recurso público, firma o banco rentable que generase ingresos o ganancias gracias a las anteriores políticas privatizadoras del así llamado "genio económico" del milagro argentino, Domingo Cavallo, no recibió ningún salvavidas de sus amigos en Wall Street. Lo que Cavallo erróneamente supuso era que su genio personal y su confianza ganada entre los banqueros del mundo se convirtió en un espejismo: los bancos no estaban interesados en sacar a flote una economía que habían comprado, saqueado y que ahora estaban en proceso de descartar mientras se mudaban a otros lugares más lucrativos del mundo. La fórmula secreta de Cavallo es conocida para todo estafador financiero: cambiar bonos de la deuda estatal vencidos hace tiempo y con altos intereses por otros con tasas de interés aún más altas, un proceso insostenible que estaba destinado a colapsar y que de hecho colapsó.

La respuesta del FMI al colapso se materializó en la misión de dicha institución que viajó a la Argentina en abril de 2002. Conducida por Anoop Singh, la misión dictó conferencias, dio entrevistas y públicamente dictó políticas para cada aspecto de la economía doméstica y las políticas sociales de Argentina³². En plena recesión, demandó que Argentina recortase sus gastos, que eliminase las monedas provinciales y las deudas, que facilitase las adquisiciones de empresas por parte de los acreedores liquidando a las empresas deudoras y aboliendo la legislación bancaria que prevé sanciones para los bancos extranjeros involucrados en movimientos ilegales de divisas. En otras palabras, Singh demandó una política estatal de austeridad orientada a asegurar un excedente estatal destinado a pagar las deudas con los bancos extranjeros, al tiempo que brindando facilidades para ampliar las transferencias de fondos al extranjero y facilitar las adquisiciones por los bancos extranjeros de las empresas endeudadas³³.

En términos político-económicos, esto se denomina como pelar los huesos del esqueleto. Con Argentina en una depresión de gran envergadura, lo que menos necesita es balancear su presupuesto y reducir el gasto

público —especialmente con seis de cada diez trabajadores en el paro en los suburbios pobres y tres de cada diez a nivel nacional.

Pero Horst Kohler, el presidente del FMI, pensaba que a Argentina habría que exprimirla aún más: "La Argentina," dijo en abril de 2002, "debe tomar la píldora amarga para salir de la crisis"³⁴. La "píldora amarga" son más recortes en el gasto público y la eliminación de más servicios y más desempleo. Como lo admitió el mismo Kohler, por lo menos 450.000 empleados públicos deberían ser despedidos por encima de un desempleo del 30%³⁵. Esto elevaría la tasa de desempleo entre un 35 y un 40% —una situación catastrófica. A continuación, él procedió a echarle las culpas a la víctima: "Los problemas que la Argentina está sufriendo son de origen doméstico"³⁶. Como si diez años de préstamos condicionados por el FMI, misiones extranjeras, programas de ajuste e ideología liberal no jugaran papel alguno en ocasionar la crisis.

El secretario del Tesoro de los EE.UU. Paul O'Neill puso su grano de arena al lado del "apretón final" del FMI, refrendando el salvataje económico del FMI a los banqueros y la adquisición de los sectores restantes de la economía. Pero él demandó, con un lenguaje típicamente eufemístico "una solución política"³⁷. Pidió un régimen autoritario fuerte, capaz de hacerle tragar por la fuerza a los argentinos empobrecidos los despidos masivos, los cortes presupuestarios y la abolición de las monedas locales. O'Neill cuestionó la "capacidad de liderazgo" del gobierno de Duhalde³⁸. Según una entrevista, O'Neill dijo que el problema de la Argentina se reducía a una sola cuestión: La de si el gobierno argentino sería capaz de hacer lo que tiene que hacer, o sea, de implementar las políticas del FMI³⁹. Lo que O'Neill y otros en las IFI y el G-7 quieren decir con "voluntad política" es precisamente el pasarle por encima a los intereses y a la supervivencia de 33 millones de argentinos, cargos electos del Congreso, gobernadores y alcaldes, y obligarles a aceptar más bancarrotas y desempleo —a empujarles más allá de un nivel de pobreza del 53% para satisfacer a los inversionistas y banqueros extranjeros.

La UE adoptó una línea igualmente dura hacia la Argentina. Según el entonces ministro de economía francés Laurent Fabius, "Las respuestas que el gobierno argentino nos ha dado [en respuesta a las recetas de austeridad del FMI] no son satisfactorias"⁴⁰. Probablemente, los comentarios más obscenos vinieron de Anne Krueger, segundo al mando del FMI, designado por los EE.UU. y ex-catedrático de Stanford. En una entrevista para el Financial Times, afirmaba que "las autoridades argentinas no son lo suficientemente realistas"⁴¹. Realismo, según Krueger, significa que en plena depresión, se corte el gasto público, se bajen los niveles de vida y se aumente el desempleo. El "realismo" al que se hace referencia en el mundo del capital financiero y su voraz apetito por exprimir aún más pagos de intereses de provincias, negocios y tesoros públicos en bancarota, por retirar aún más ahorros impunemente de la Argentina.

El equipo de la Embajada de los EE.UU. en Argentina fue aún más lejos. El Agregado de Asuntos Políticos Michael Matera afirmaba que la crisis de la Argentina se debía no sólo a sus líderes políticos, sino a todo el pueblo argentino. "El punto de vista de los economistas internacionales es incompatible con la mentalidad nacional de los argentinos. Los argentinos tienen una incapacidad colectiva para cambiar; son inmaduros y paranoicos"⁴².

Hay algunas evidencias de que una razón adicional para la línea dura de EE.UU.-UE.-FMI es la cesación unilateral de pagos de parte de Argentina sobre la deuda de \$140.000 millones. Según un congresista argentino, un funcionario del FMI le dijo que "Lo que nunca les perdonaremos es que su gente del Congreso celebre y aplaudiese luego que (el ex-presidente por una semana) Adolfo Rodríguez Saa declarase la cesación de pagos"⁴³. Desde esta perspectiva, la línea dura tendría como sentido el advertir a cualquier otra nación latinoamericana que contemple la cesación de pagos de la deuda acerca de las duras consecuencias.

El régimen de Duhalde, atado estructuralmente al capital transnacional financiero argentino, al sector

agroexportador y al capital extranjero sólo puede encontrar una solución a través de un acuerdo con el FMI, el cual presumiblemente podría abrir un poco las billeteras de los prestamistas privados, y conducir a una renegociación de la deuda pendiente. La falta de disposición del gobierno de Duhalde para desarrollar un plan alternativo, como lo demandan los economistas disidentes argentinos, está basada en vínculos estructurales a gran escala y a largo plazo entre el régimen y la clase dominante. Dado el total descrédito de esa clase dominante y sus desastrosas políticas para el 80% de la población argentina y la desintegración de la nación, y una oposición masiva y activa, su autoridad política es virtualmente nula y su capacidad de toma de decisiones se ve estrechamente limitada.

El trasfondo histórico de la secuencia de políticas del G-7 y las IFI de finanzas-saqueo-abandono y su cambio hacia una posición de línea dura está basada en dos consideraciones. Durante los 14 años anteriores, el capital euroestadounidense consiguió todo lo que quería de los gobiernos de Menem y De la Rúa. En segundo lugar, las 'gangas' fáciles y lucrativas del pasado ya no están disponibles, sólo una explotación intensiva en lugar de una extensiva puede proveer ganancias en este momento histórico.

La historia anterior en la que el FMI dictaba las políticas y el gobierno argentino obedecía, ha condicionado a los dirigentes a asumir un régimen de obediencia en lugar de uno de negociaciones y reciprocidad. Los prestamistas extranjeros siempre han sido conscientes del carácter venal de la clase política y dirigente argentina, pero estaban dispuestos a seguir prestando dinero aunque fuese objeto de la rapiña durante tanto tiempo como fuera posible, siempre y cuando ellos a su vez pudiesen saquear la economía. Hoy, sin embargo, con el saqueo ya completo, la elección es entre los ingresos de los bancos o el despilfarro de los fondos para mantener a las maquinarias electorales provinciales corruptas. Los acreedores están demandando que la clase política recorte a los caudillos provinciales y a sus sectores públicos inflados para

hacer frente a sus obligaciones con el extranjero. Si esto significa dar fuerza a la oposición y minar el apoyo político del régimen, entonces los banqueros insisten por todos los medios que se apliquen poderes extraordinarios, que se muestre "decisión política" — que se convierta al régimen en una dictadura autoritaria. Cómo es que esta dirigencia podría gobernar —aún con un poder dictatorial— dado el eventual empobrecimiento de tres cuartas partes de la población es una pregunta que ni Krueger, O'Neill, Kohler, Wolfenson hacen ni para la que tienen respuesta.

Sin embargo, las IFI y el G-7 sabe que Duhalde estructuralmente no tiene alternativas para ver el mundo, excepto a través del refinanciamiento a cargo de un grupo de banqueros dirigido por el FMI. Ellos saben que él es un rehén y representante de toda la vida el capital extranjero y de sus socios domésticos, y por lo tanto, presa fácil de las presiones. La vulnerabilidad que ellos perciben en el régimen da aliento a su enfoque de "línea dura".

El tercer factor que condiciona la respuesta de línea dura del FMI y el G-7 es la radicalización cada vez mayor de la población argentina y las protestas de masas y levantamientos populares casi diarios. El "factor de riesgo" en la Argentina es extremadamente alto a los ojos de



los inversionistas. El miedo es el de que si Duhalde cae o es derrocado podría resultar un régimen populista nacionalista que renegase de todos los acuerdos previos. Paradójicamente, si las demandas del FMI y del G-7 fuesen satisfechas, probablemente darían pie a un gran levantamiento popular. Entre más alto el FMI y el G-7 ponen la barrera para garantizar el financiamiento, más dura será la caída del régimen que intente saltarla. Implícita en la estrategia económica de línea dura de las elites políticas y económicas de Washington y Madrid está la idea de que el ejército argentino intervendría para derrocar un régimen popular adverso. Sin embargo, un golpe militar en el presente contexto tendría lugar en un vacío político absoluto, desprovisto de todo apoyo político y social.

El estilo y la sustancia de las relaciones de Argentina con el G-7 hablan de un nuevo imperialismo⁴⁴: el saqueo de la economía, el crecimiento de profundas desigualdades, el estancamiento económico seguido por una depresión profunda y duradera y el empobrecimiento masivo de la población como consecuencia de la mayor concentración de la riqueza en la historia argentina de los siglos XX y XXI. El nuevo imperialismo funciona directamente a través del sistema interestatal y de las instituciones financieras subsidiarias como el FMI para dictar las políticas. La misión de abril del FMI, con sus pronunciamientos públicos sobre todos y cada uno de los aspectos de la economía argentina, los dictados descarados de la embajada de los EE.UU. y de los ministros de economía del G-7 tienen un fuerte eco de las relaciones coloniales del pasado. La sumisión ciega del régimen argentino, su buena disposición para implementar esas políticas, que deterioran profundamente los niveles de vida para satisfacer las demandas imperiales, hablan a las altas y a las claras de un nuevo tipo colonial de imperio. El Nuevo Colonialismo, sin embargo, impuesto sobre un ex país industrializado con niveles de vida relativamente altos para el Tercer Mundo, no sólo tiene que provocar mayores desigualdades económicas, sino también una extrema polarización política y social, lo que va totalmente en contra de los poderes imperiales-coloniales y toda la clase política argentina.

Los levantamientos populares

En una gira por la provincia de Tucumán en abril de 2002, visitamos las grandes villas miseria o barrios marginales y hablamos con la multitud de pobres e indigentes: nos dijeron que entre 2001 y 2002, en sólo un año, el número de niños que sufren de malnutrición se incrementó seis veces. La combinación de despidos masivos, inflación y los recortes de raciones de alimentos convirtió a los pobres en indigentes, incapaces tan siquiera de satisfacer sus necesidades alimenticias más básicas.

Una semana más tarde, cuando estábamos reunidos con un delegado sindical del sindicato de trabajadores bancarios de Buenos Aires, fuimos informados de que los bancos estaban planeando despidos masivos. Un mes más tarde (el 19 de mayo de 2002), un periódico cercano a la elite financiera, *La Nación*, publicó en un reporte que los bancos estaban planeando despedir a dos terceras partes de sus empleados, 80.000 de los 120.000 existentes, y reducir los sueldos del resto de la planilla⁴⁵.

A principios de julio las calles se encontraban agitadas con manifestantes, el crimen estaba fuera de control, profesores universitarios con tres cátedras estaban ganando 200 dólares al mes, se bloqueaban carreteras y los caceroleros jubilados y miembros de la clase media empobrecidos se estaban reuniendo, no sólo para demandar el derrocamiento del gobierno, sino de toda la clase política.

La profundización de la polarización política en Argentina ha tomado una variedad de formas políticas y sociales: un levantamiento popular que derrocó al régimen de De la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001; la rebelión permanente en las provincias, las constantes movilizaciones de masas de los desempleados (piqueteros) y las asambleas de gente de clase media y barrios de las clases trabajadoras (caceroleros).

El 19 y 20 de diciembre de 2001, cientos de miles de argentinos salieron a las calles a protestar contra la